



INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID.

Nº EXPEDIENTE: A/OBR-002758/2024

De conformidad con lo que establece el artículo 116.4, letra e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 UE y 2014/24 UE, de 26 de febrero de 2014, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer:

El contrato regula las condiciones que han de regir la contratación de la redacción de los proyectos básicos y de ejecución y la ejecución de la obra de la ciudad de la justicia del partido judicial de Madrid.

Dichas prestaciones se ejecutarán a fin de concentrar, en un único espacio, la pluralidad de órganos jurisdiccionales que tienen su sede en la capital, concretamente, 356 órganos judiciales, distribuidos en 26 edificios, cuya finalidad principal es la mejora de la calidad del servicio público de la Administración de Justicia, persiguiendo además los siguientes objetivos:

- Centralizar los edificios judiciales en una misma sede, solventando el déficit de espacios y la antigüedad constructiva de algunos de los edificios actuales.
- Generar espacios de reserva al objeto de dotar las necesidades de espacio para las futuras ampliaciones de la planta judicial de Madrid.
- Mejorar la eficacia y funcionamiento de los órganos judiciales, eliminando la merma en la operatividad de la Administración de Justicia derivada de la dispersión de las sedes judiciales.
- Dotar de unas infraestructuras modernas y funcionales al partido judicial de Madrid, de manera que la actividad de los operadores jurídicos se desarrolle con los mejores parámetros de calidad posibles.

- Proteger a las víctimas de delitos y la intimidad de los usuarios, implementando espacios de atención específica y separación de circulaciones entre detenidos, funcionarios y público.
- Creación de unas infraestructuras judiciales plenamente accesibles, sin barreras arquitectónicas y con la implementación de las medidas necesarias para lograr la accesibilidad universal en los edificios judiciales, que permita el acceso efectivo a la justicia de todas las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que el resto de los usuarios de este servicio público esencial.
- Optimizar los recursos reduciendo los costes asociados al arrendamiento de las sedes, al mantenimiento y conservación de las instalaciones, así como los costes asociados de los servicios comunes.

La dispersión del patrimonio judicial existente en la actualidad, el déficit de espacios o distribución no adecuada de los usos, la antigüedad de construcción de los mismos, y la falta de concentración de órganos pertenecientes a un mismo orden jurisdiccional, resta celeridad al trabajo ordinario de los profesionales del ámbito judicial, que se ven obligados a efectuar desplazamientos a distintas sedes, aun cuando sus asuntos recaigan en una misma instancia y orden jurisdiccional; una casuística que por supuesto, también afecta al ciudadano usuario de la Administración de Justicia madrileña.

El nuevo proyecto se configura para dotar de una mejora de las condiciones laborales del personal de la Administración de Justicia, adaptando los nuevos edificios a las necesidades actuales del desarrollo de la actividad judicial.

Por todo lo anterior, el proyecto promovido por la Comunidad de Madrid pretende lograr una organización de la Justicia más funcional, llevando a cabo una distribución de espacios acorde a las necesidades reales de la Administración de Justicia, estableciendo mecanismos que permitan compartir servicios comunes y dotando a la nueva superficie de las infraestructuras tecnológicas más modernas e innovadoras.

Por tanto, calificadas las obras públicas de interés dentro de su propio territorio como competencia de la Comunidad de Madrid (Título II del Artículo 26 del Estatuto de Autonomía de

la Comunidad de Madrid), se procede a la gestión de las mismas a través de los cauces previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

En definitiva, se pretende dar cumplimiento al principio de servir con objetividad a los intereses generales mediante la optimización de los recursos disponibles, con una utilización adecuada y racional de los mismos para obtener su máximo rendimiento, en aras a mejorar notablemente el desarrollo de la actividad judicial. En concreto, el sistema propuesto, al concentrar la totalidad de las sedes judiciales, eliminar arrendamientos y optimizar los contratos de servicios accesorios, tales como la limpieza, vigilancia y mantenimiento, supone un ahorro de recursos para la Comunidad de Madrid.

Por tanto, el adjudicatario asumirá las siguientes obligaciones:

- a) Redacción de los proyectos básico, de ejecución y complementarios, de las obras de construcción, ajustando su contenido a las determinaciones legales y reglamentarias de aplicación.
- b) Tramitación y obtención de cuantas autorizaciones e informes sean preceptivos, en relación con la tramitación del proyecto y cuantas otras licencias o permisos resultaren preceptivas.
- c) Tramitación y obtención de cuantas licencias de obra, actividades clasificadas, industriales o sectoriales, graven la actuación como paso previo al inicio de la ejecución de las obras, así como la liquidación de cuantos impuestos y tasas graven la actuación (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tasa por expedición de licencia de obra, visados profesionales, tasas administrativas de todo tipo, etc.).
- d) La construcción de las obras recogidas en los proyectos redactados por el adjudicatario y aprobados por la Comunidad de Madrid.

Madrid, en el día de la fecha

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Firmado digitalmente por: GARCIA VALDECASAS RODRIGUEZ DE RIVERA PABLO
Fecha: 2024 01 26 13:07